



BOGOTÁ



ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ -
SECRETARIA GENERAL

No Radicado: 2-2020-7761

Fecha: 18/03/2020 15:51:11

Destino: CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.

Anexos: N/A

Copia: N/A

www.secretariageneral.gov.co

4200000
Bogotá D.C.,

Señora
ILBA CARDENAS PEÑA
Secretaria General de Organismo de Control
CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.
Calle 36 No. 28 A -41
Ciudad

Asunto: Respuesta a la Proposición No. 325 aprobada en sesión plenaria ordinaria del día 04 de marzo de 2020.

Respetada Secretaria:

La Secretaría General recibió su comunicación del asunto, mediante la cual remite el texto de la Proposición No. No. 325 aprobada en sesión plenaria ordinaria del día 04 de marzo de 2020, respecto de la cual se procede a dar respuesta de la siguiente manera:

Respuesta preguntas 1 y 2:

La Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas la Paz y la Reconciliación – ACDVPR-, en cumplimiento del deber legal establecido por el artículo 174 de la ley 1448 de 2011, le corresponde a *“diseñar e implementar, a través de los procedimientos correspondientes, programas de prevención, asistencia, atención, protección y reparación integral a las víctimas”*. Por ello la ACDVPR es la encargada en el Distrito Capital de ejecutar y/o articular con las entidades que conforman el Sistema Distrital de Atención, Asistencia y Reparación Integral a las Víctimas – SDARIV-, las medidas de asistencia y atención contenidas en el artículo 49 de la ley 1448 de 2011.

Sin embargo, es preciso acotar que la Ley 1448 de 2011 ha establecido tres (3) fases o etapas de atención humanitaria; (i) inmediata; (ii) emergencia; (iii) transición, las cuales varían según su temporalidad, y en las que son el Distrito y la Nación responsables conjuntos de su ejecución.

Específicamente, los artículos 47 y 63 de la Ley 1448 de 2011 indican que **las entidades territoriales** son las encargadas de atender a la población que manifiesta ser víctima del conflicto armado, en la **etapa de ayuda o atención humanitaria inmediata, siempre que se verifique la existencia de un estado de vulnerabilidad acentuada producto del hecho declarado, y hasta su inclusión en el Registro Único de Víctimas RUV-** por parte de la Unidad Administrativa para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas –UARIV-, entidad del orden nacional a quien corresponde atender las etapas subsiguientes de la atención.



Por ello la ACDVPR hace entrega de componentes de alimentación, aseo personal, manejo de abastecimientos, utensilios de cocina, transporte de emergencia y alojamiento transitorio en condiciones dignas, de conformidad con las necesidades identificadas previa evaluación de las condiciones de vulnerabilidad, y la verificación del cumplimiento de las condiciones legales. Todos estos servicios operan una vez la persona rinde su declaración ante el Ministerio Público, y solicita personalmente alguna de las medidas de asistencia y atención de acuerdo a sus necesidades particulares, las cuales varían de acuerdo a la afectación generada por el hecho victimizante. En efecto, los componentes indicados, se entregan por demanda.

De otra parte, teniendo en cuenta que la ACDVPR funge como entidad coordinadora de la implementación de la política pública de víctimas en el Distrito Capital, función a partir de la cual realiza una gestión interinstitucional relacionada con bienes y servicios para víctimas, que resulta de la ejecución de planes, programas y proyectos de entidades del Sistema Distrital de Atención y Reparación Integral a las Víctimas – SDARIV-; durante la etapa de atención humanitaria inmediata también se lleva a cabo una labor de articulación con la oferta de 18 entidades del orden distrital entre Secretarías e Institutos adscritos, los cuales contribuyen de manera activa a la implementación de acciones en el marco de los componentes y compromisos de esta política pública.

Esta articulación tiene como propósito que la población víctima en estado de vulnerabilidad sea atendida de manera integral de acuerdo a las necesidades que presenta cada sistema familiar, por lo tanto, las medidas de asistencia y atención entregadas son complementarias, y no excluyentes.

De otra parte, y en lo relacionado a la ubicación de los Centros Locales de Atención a Víctimas en

la
(7
V
ce
re
10

siete
ón a
ntros
a lo
creto



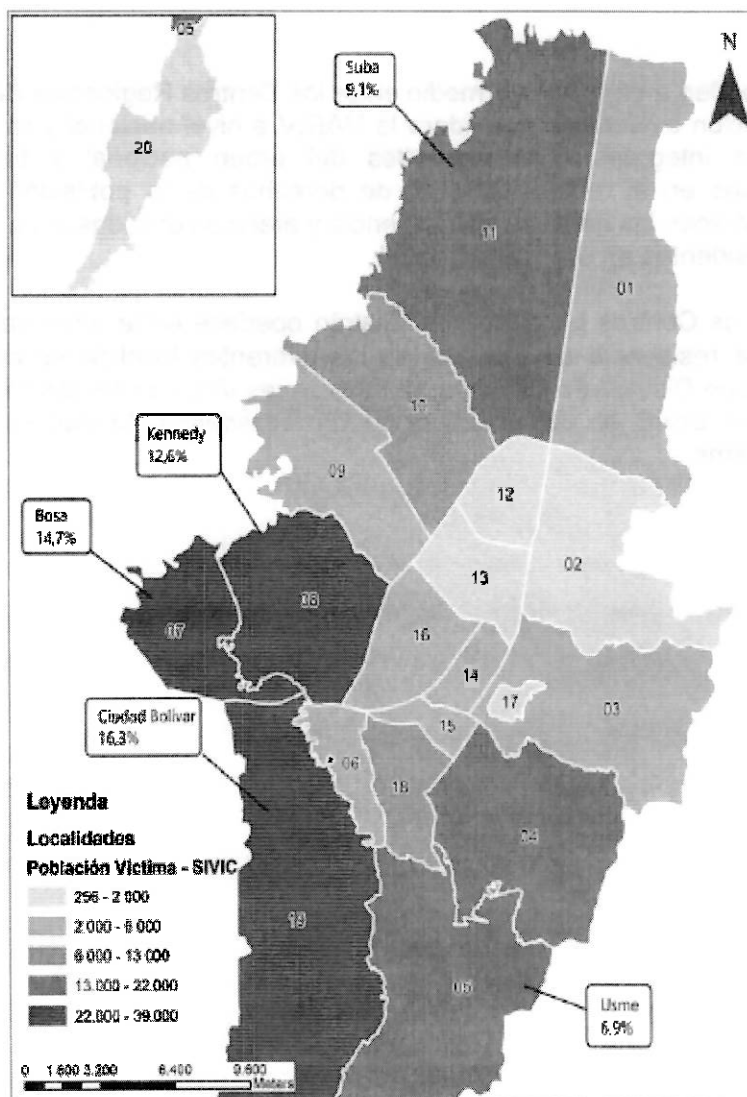


Los CLAV corresponden a un nivel intermedio entre los Centros Regionales de Atención y los Puntos de Atención a Víctimas que lidera la UARIV a nivel nacional y se constituyen en una plataforma integradora de entidades del orden nacional y territorial con competencias legales en el restablecimiento de derechos de la población víctima. A través de ellos se ofrecen las medidas de asistencia y atención dirigidas a las víctimas del conflicto armado residentes en el Distrito Capital.

La disposición de los Centros Locales en el Distrito obedece entre otras variables, a la concentración de la residencia de víctimas en las diferentes localidades de la ciudad. Según el Observatorio Distrital de Víctimas, el 59% de las víctimas residentes en Bogotá caracterizadas en el SIVIC se ubican en cinco (5) localidades: Ciudad Bolívar, Bosa, Kennedy, Suba y Usme.

Cra 8 No. 10 - 65
Código postal 111711
Tel: 381 3000
www.bogota.gov.co
Info: Línea 195





Concentración de víctimas por localidades

Cada localidad presenta una serie de particularidades demográficas, territoriales, organizativas, sociales y de equipamientos, que a su vez se reflejan en las dinámicas de orientación y atención de los Centros Locales.

Respuesta pregunta 3, 3.1 y 3.2:

Mediante el Acuerdo 491 de 2012 se conformó en Bogotá el Sistema Distrital de Atención y Reparación Integral a las Víctimas de Graves Violaciones a los Derechos Humanos,



Delitos de Lesa Humanidad y Crímenes de Guerra – SDARIV-, el cual se encuentra constituido por el conjunto de entidades públicas del nivel distrital y nacional.

Por ello, la Alta Consejería como coordinadora del sistema SDARIV atiende a la población víctima residente en la ciudad de Bogotá D.C., pero no ejecuta proyectos de vivienda, ya que dentro del marco de sus competencias le corresponde a la Secretaría Distrital del Hábitat entre otras de sus funciones, el mejoramiento integral de los asentamientos, los reasentamientos humanos en condiciones dignas, el mejoramiento de vivienda, la producción de vivienda nueva de interés social y la titulación de predios en asentamientos de vivienda de interés social.

Así mismo, de acuerdo a lo establecido por el Decreto Distrital 623 de 2016, la oferta institucional en materia de vivienda está a cargo de la Secretaría de Hábitat. A su vez, dicha normativa creó el Programa Integral de Vivienda Efectiva -PIVE, el cual busca el acceso a una vivienda digna o superar las carencias básicas de una vivienda por parte de hogares en condición de vulnerabilidad o de desplazamiento forzado por el conflicto armado interno (artículo 1).

Respuesta pregunta 4:

De acuerdo a las competencias de la entidades territoriales indicadas en el artículo 174 de la Ley 1448 de 2011, *"Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones"*, en el Plan de Desarrollo Distrital *"Bogotá mejor para todos"*, dentro del pilar denominado *"Construcción de comunidad y cultura ciudadana"*, se estipuló el programa 23 *"Bogotá mejor para las víctimas, la paz y la reconciliación"*, motivo por el cual, no generó presupuesto específico con destino a los acuerdos de paz, ni al Plan Marco de Implementación, toda vez que el PDD es anterior a la suscripción de los acuerdos. Sin embargo, para responder a lo establecido en el programa 23 del PDD, la ACDVPR creó una estructura presupuestal basada en el único proyecto de inversión (Proyecto 1156 – *Bogotá, Mejor para las Víctimas, la Paz y la Reconciliación*), cuya finalidad es la desarrollar instrumentos de pedagogía social de memoria y paz para la no repetición de la violencia política, y fortalecer los procesos de construcción de paz a nivel local, promover la reconciliación y la convivencia entre distintos actores.

En el marco de la Estrategia de Paz, la Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación y la Agencia Colombiana para la Reincorporación y la Normalización –ARN- desarrollaron una estrategia conjunta para aportar a la reintegración y reincorporación de la población excombatiente en la ciudad de Bogotá. En este sentido, se estableció un plan de acción que estableció las siguientes acciones:

1. La sensibilización y capacitación a todas las entidades de la Alcaldía de Bogotá frente a la reintegración y reincorporación de los excombatientes. Para dar cumplimiento a este fin, se creó la Mesa Técnica de Reincorporación y Reintegración, que contó con la participación de la Secretaría de Salud; Secretaría de Educación; La Secretaría de



Planeación; La Secretaría de Cultura; La Secretaría de Hábitat; La Secretaría de Desarrollo Económico; la Secretaría de Mujer; La Secretaría de Medio Ambiente; El Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal; El Instituto para la Economía Social; El Instituto Distrital de Recreación y Deporte; El Instituto Distrital de las Artes. Como parte de la sensibilización y capacitación, en cada una de las sesiones de la Mesa realizadas, se presentó el avance en los procesos de reintegración y reincorporación en la ciudad.

Adicionalmente, en esta mesa se identificó la oferta requerida por la población excombatiente, para posteriormente, realizar las articulaciones necesarias con las entidades competentes.

2. Alistamiento institucional y social frente a la recepción de personas en proceso de reincorporación de las FARC-EP: La Mesa Técnica de Reincorporación y Reintegración contó con la participación del Consejo Nacional de Reincorporación, lo que permitió a las entidades del Distrito conocer los lineamientos y avances de la reincorporación y las obligaciones establecidas para los entes territoriales.

3. Contribución a la atención y restablecimiento de derechos de menores de edad desvinculados del conflicto armado: La ACDVPR presentó a la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, la oferta disponible a nivel distrital, susceptible de ser articulada con la ruta de atención diferencial a cargo del programa Camino Diferencial de Vida dirigido a los menores de 18 años desvinculados de las FARC-EP.

4. Articulación con el objetivo de identificar la oferta idónea para la población excombatiente que solicita apoyo en los Centros Locales de Atención a Víctimas -CLAV-. De forma recurrente, la población excombatiente se acerca a los CLAV para solicitar ayuda humanitaria inmediata, razón por la que se articularon acciones con la ARN para tener la capacidad de identificar que la persona sea acreditada por el Comité Operativo para la Dejeción de la Armas (CODA).

Independientemente de si la persona cumple o no con los criterios para obtener la ayuda humanitaria inmediata –esto, si presenta la doble condición de víctima y PPR- se logró generar unos lineamientos para que desde los CLAV se oriente a las personas sobre la importancia de acercarse al ARN para poder contar con los beneficios de la ruta de reintegración o lo acordado en el marco de la reincorporación.

Respuesta pregunta 5 y 5.1:

La Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación – ACDVPR – no tiene competencia para realizar el seguimiento al control de legalidad que realizan las cooperativas asociadas de los excombatientes de las FARC, así lo dispuso el Decreto Ley 899 de 2017 *“Por el cual se establecen medidas e instrumentos para la reincorporación económica y social colectiva e individual de los integrantes de las FARC-EP conforme al Acuerdo Final, suscrito entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP el 24 de noviembre de 2016”* que determinó en el último inciso del artículo



4: "El funcionamiento de ECOMUN seguirá los lineamientos dados por la normatividad vigente en materia de economía solidaria".

Esas mismas disposiciones deben ser cumplidas y acatadas para el funcionamiento de las cooperativas en Colombia, que de acuerdo con la Circular base jurídica 2015 de la Superintendencia de Economía Solidaria son objeto de supervisión las siguientes:

"De conformidad con las leyes 79 de 1988 y 454 de 1998 y los decretos 1333, 1480, 1481 y 1482 de 1989 y 4588 de 2006, las siguientes organizaciones se encuentran bajo la supervisión de esta Superintendencia:

- Las cooperativas de base o de primer grado.
- Los organismos cooperativos de segundo y tercer grado.
- Las precooperativas.
- Las empresas de servicios en las formas de administraciones públicas cooperativas.
- Fondos de empleados.
- Asociaciones mutuales.
- Instituciones auxiliares de la economía solidaria.
- Organismos de integración de la Economía Solidaria.
- Otras formas asociativas solidarias innominadas que cumplan con los requisitos previstos en el Capítulo Segundo del Título Primero de la Ley 454 de 1998.
- Las organizaciones de la economía solidaria que mediante acto de carácter general determine el Gobierno Nacional."

Así las cosas, el Control de Legalidad le compete a esa Superintendencia, cómo un elemento esencial para la constitución y el registro de la cooperativas, la cual determina en su circular base jurídica que "Una vez realizada la asamblea de constitución se deberá allegar a la Superintendencia de la Economía Solidaria para el control de legalidad, los documentos exigidos en los artículos 14 y 15 de la Ley 79 de 1988 y los previstos en el numeral 3 capítulo VIII del presente título" (Circular Básica Jurídica 2015).

Ahora bien, las constituciones de estas cooperativas necesitan para su conformación un registro ante las cámaras de comercio del lugar en el que pretenden desempeñar su ejercicio comercial, por lo anterior el competente para determinar cuáles son las cooperativas registradas en Bogotá es la Cámara de Comercio de Bogotá, así lo determina la Circular Básica Jurídica 2015 de la Superintendencia de Economía Solidaria:

"Todos los documentos protocolizados... deberán registrarse ante la Cámara de Comercio del domicilio principal del ente que se constituye o la entidad encargada de realizar el registro.

La entidad cooperativa respectiva deberá efectuar, adicionalmente, la inscripción de todos los demás actos, libros y documentos en los que se exija tal formalidad, ante la Cámara de

Cra 8 No. 10 - 65
Código postal 111711
Tel: 381 3000
www.bogota.gov.co
Info: Línea 195





Comercio del domicilio principal del ente que se constituye o la entidad encargada de realizar el registro.

La entidad adquirirá existencia legal y formará una persona distinta de sus asociados individualmente considerados, a partir de la inscripción en el registro de la Cámara de Comercio con jurisdicción en el domicilio principal de la persona jurídica que se constituye o la entidad encargada de realizar el registro."

En ese sentido la competencia para establecer las cooperativas registradas en la Cámara de Comercio le compete a ese ente, puesto que los libros y actas se registran en sus archivos, de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 que determina:

"Artículo 143. CONSTITUCIÓN DE ENTIDADES DE NATURALEZA COOPERATIVA, FONDOS DE EMPLEADOS Y ASOCIACIONES MUTUAS. Las entidades de naturaleza cooperativa, los fondos de empleados y las asociaciones mutuales, así como sus organismos de integración y las instituciones auxiliares del cooperativismo, son entidades sin ánimo de lucro y se constituirán por escritura pública o documento privado, el cual deberá ser suscrito por todos los asociados fundadores y contener constancia acerca de la aprobación de los estatutos de la empresa asociativa."

Respuesta pregunta 6, 6.1 y 6.2:

Según lo establecido en artículo 2° del Decreto 437 de 2016, la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, como líder del sector "Generación de Ingresos", es la entidad "encargada de formular, orientar y coordinar políticas de incentivos para propiciar y consolidar la asociación productiva y solidaria de los grupos económicamente excluidos" y de "formular y coordinar políticas para propiciar la realización de convenios con organizaciones populares y de economía solidaria que implementen proyectos productivos y de generación de empleo". Por tanto, será dicha dependencia quien definirá los lineamientos de tales políticas, en conjunto con las demás entidades del orden nacional, tales como:

- Ministerio del Trabajo
- Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA
- Departamento Nacional de Planeación
- Ministerio de Comercio Industria y Turismo
- Ministerio de Educación Nacional
- Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
- Instituto Colombiano de Desarrollo Rural
- Fondo para la Financiación del Sector Agropecuario.
- Departamento para la Prosperidad Social

Por lo anterior, corresponde a la SDD responder con amplitud las preguntas formuladas en este cuestionario. Sin embargo, es pertinente mencionar que la Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación (ACDVPR), en ejercicio de sus funciones establecidas en el artículo 7 del Decreto 425 de 2016 de asesorar, orientar, gestionar y coordinar las estrategias encaminadas a la reparación integral de la población víctima residente en Bogotá, desde la línea de generación de ingresos ha trabajado en procesos de articulación entre el sector público y privado a fin de contribuir y facilitar la inserción productiva de la población víctima del conflicto armado residente en la ciudad de Bogotá.



Así las cosas, se creó una estrategia, en torno a los aspectos socioeconómicos, la cual cuenta con cinco componentes claramente diferenciados:

1. Acompañamiento psicosocial y orientación vocacional y laboral: Estos ejes transversales, están orientados a fortalecer las habilidades blandas de la población víctima, con una valoración y diagnóstico, que pretende estructurar un modelo y unas herramientas hechas a la medida para contribuir a su incorporación al mercado laboral y productivo de la ciudad.

2. Formación académica superior: Siempre de la mano del acompañamiento Psicosocial, la ACDVPR realiza la gestión necesaria para que las personas víctimas que consideren que la formación superior es necesaria para su desarrollo productivo en la ciudad, puedan hacerlo por medio de la oferta presentada por el Distrito o la Nación.

3. Empleabilidad: Esta etapa va dirigida a la población víctima residente en Bogotá D.C. que considera el acceso a un empleo digno como fuente de ingresos para contribuir a su desarrollo económico y el de sus familias. De esta manera la ACDVPR realiza las gestiones pertinentes con agencias públicas de empleo, entidades públicas del sector, empresa privada y organismos internacionales, para vincular laboralmente a la población objeto en condiciones favorables para la restauración de sus derechos.

4. Orientación empresarial: Esta etapa está dirigida a las personas víctimas que consideren que el emprendimiento es la ruta para contribuir con su desarrollo económico y el de sus familias. De esta manera la ACDVPR realiza los acercamientos necesarios con las entidades públicas del sector, para que las unidades productivas de la población víctima cuenten con el asesoramiento, el financiamiento y oportunidades de mercado que permitan contribuir con la economía familiar y local.

5. Seguimiento y evaluación: Las políticas públicas requieren para la medición de impacto, el continuo seguimiento y oportuna evaluación, con el fin de tomar decisiones en torno a sus resultados. Es por ello que esta etapa es fundamental en el desarrollo de la estrategia. Lo anterior, también está dirigido hacer seguimiento con las entidades públicas y privadas del sector, a fin de identificar el estado de remisiones realizadas de la población a las diferentes ofertas.

Por lo anterior, la ACDVPR realiza un proceso de caracterización en el componente de gestión de ingresos a través de la herramienta SIVIC en los Centros Locales de Atención a Víctimas –CLAV- como puerta de ingreso a la ruta de gestión para la estabilización socioeconómica. Este proceso permite obtener el historial ocupacional de una persona, a través de la identificación de habilidades, intereses, destrezas, formación y experiencia laboral, así como desempeño productivo, creando así un perfil ocupacional con la perspectiva de orientar y fomentar su inclusión socio-productiva a través de la gestión, focalización, remisión y seguimiento de la oferta acorde al perfil.

Los resultados teniendo en cuenta el enrutamiento generado son los siguientes:

ENRUTAMIENTO	N. PERSONAS
EMPLEABILIDAD	7189
EMPRENDIMIENTO	2699
FORMACIÓN	1963



Total enrutamientos	11851
---------------------	-------

FUENTE: Herramienta SIVIC. 2016- 2019 (información extraída de informe caracterizaciones empalme 2019)

Esta ruta, nos permite articular, entre otras, con la oferta con la que cuenta la SDD, que se describen de manera sucinta a continuación:

a. Ruta de emprendimiento: Cuenta con un Centro de Negocios disponible para el asesoramiento a emprendedores y empresarios, con capacitación, talleres y charlas especializadas para orientar la puesta en marcha y desarrollo para materializar su idea de negocio o unidad productiva. Si bien la Secretaría **no aporta capital semilla ni financiación directa**, esta realiza convenios con algunas entidades financieras quienes pueden facilitar el acceso a los servicios financieros que puedan requerir los emprendedores y empresarios.

b. Ruta de empleabilidad: Se hace a través de la Agencia Pública de Empleo "Bogotá Trabaja" ubicada en la plaza 8, en la Carrera 60 # 63 A 52 - Recinto Ferial Plaza de los Artesanos, teléfonos 3693777 Ext. 163, 199 y 264. Su horario de atención es de lunes a viernes en jornada continua de 7:30 am a 4:00 pm.

A estas rutas usted puede acceder toda la población residente en Bogotá, incluyendo las víctimas de conflicto armado y excombatientes que voluntariamente quieran vincularse a alguna de las estrategias mencionadas.

Respuesta preguntas 7, 7.1, y 7.2:

Mediante el Decreto Distrital 631 de 2017 se reglamenta el Fondo Distrital para la Educación Superior – "Educación Superior para Todos", el cual constituye una estrategia distrital, para la eliminación de barreras de acceso a la educación superior, de personas residentes en Bogotá, indistintamente de su condición de víctimas.

Sin embargo, la Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación – ACDVPR- de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá DC, adelanta constantes procesos de articulación como lo son con el Ministerio Nacional de Educación, Secretaría Distrital de Educación, ICETEX y la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas –UARIV-. Esta articulación ha permitido sacar varias convocatorias para que población víctima residente en Bogotá tenga una opción más para iniciar sus procesos de formación.

El Fondo de Reparación para el Acceso, Permanencia y Graduación en Educación Superior es una medida de asistencia, atención y reparación integral adoptada por el Ministerio de Educación Nacional, la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas y el ICETEX, a la cual se han **adherido** la Secretaría de Educación Distrital (SED) y la ACDVPR en Bogotá, en el ejercicio de sus competencias funcionales y territoriales para fomentar el acceso, permanencia y graduación de la población víctima en educación superior residentes en Bogotá DC, en cumplimiento de los artículos 51 de la Ley 1448 de 2011, 95 del Decreto Reglamentario 4800 de 2011, 88 del Decreto 4633 de 2011, 62 del Decreto 4634 de 2011, 52 del Decreto 4635 de 2011 y Decreto Nacional 3011 de 2013.

Así las cosas, y como lo establece el artículo tercero del Reglamento Operativo que rige el Fondo, *“Los recursos están destinados a financiar créditos educativos condonables de pregrado en respuesta a lo ordenado por la Ley 1448 de 2011...”*. Los créditos educativos condonables se otorgarán a víctimas del conflicto armado interno que se encuentren incluidas en el Registro Único de Víctimas -RUV- o reconocidas como tal en las Sentencias de Justicia y Paz, en las de Restitución de Tierras o en las de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que estén cursando sus estudios o se encuentren admitidos en una Institución de Educación Superior reconocida por el Ministerio de Educación Nacional, para cursar un programa académico de pregrado en nivel técnico profesional, tecnológico o universitario.

El Fondo de Educación Superior, financia lo concerniente al valor de matrícula determinado por la Institución de Educación Superior que ofrece el programa académico, el costo a cubrir es de hasta once salarios mínimos mensuales legales vigentes (11 SMMLV) por cada semestre; así como un valor de sostenimiento por valor de uno punto cinco salarios mínimos mensuales legales vigentes (1.5 SMMLV) al beneficiario y se entrega por semestre, está condicionado a la permanencia estudiantil.

Sin embargo, se debe aclarar que la administración de los recursos aportados por cada uno de los constituyentes está a cargo del ICETEX; para lo cual se nombró una Junta Administradora, máximo órgano administrativo y decisorio del Fondo, instancia donde se evalúan y se toman decisiones relacionadas con los casos presentados por los aspirantes o beneficiarios del Fondo.

De acuerdo a lo anterior es el Instituto Colombiano de Crédito y Estudios en el Exterior la llamada a dar respuesta a los interrogantes elevados por los Honorable Concejales, considerando que si bien, la Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá realiza aportes, no tiene ningún tipo inherencia administrativa sobre los recursos del fondo en cuestión.

Respuesta pregunta 7.4:

De conformidad con el Decreto 512 de 2019 (artículo 33) las mesas locales estarán conformadas por los representantes de las OV y las ODV elegidos según el proceso que señala la UARIV de acuerdo al artículo 28 de la Resolución 388 de 2013 modificado por el artículo 10 de la Resolución 828 de 2014, y se integrarán por cupos a proveer por cada hecho victimizante y/o enfoque diferencial, eligiéndose un delegado principal y un suplente. Se podrán conformar mesas locales en aquellas localidades en donde se hayan inscrito y están presentes en el proceso de elección e instalación de la mesa, mínimo tres (3) OV. Las mesas locales tendrán un cupo máximo de veintiocho (28) miembros principales, de acuerdo con la siguiente distribución:

1. Dos (2) cupos para representantes de OV postulados por hechos victimizantes contra la vida y la libertad (homicidios, masacres, secuestro, desaparición forzada), de los cuales por lo menos uno tendrá que ser mujer.
2. Dos (2) cupos para representantes de OV de hechos victimizantes contra la integridad física o psicológica, de los cuales por lo menos uno tendrá que ser mujer.
3. Dos (2) cupos para representantes de OV de violencia sexual, de los cuales por lo menos uno tendrá que ser mujer.
4. Dos (2) cupos por el hecho victimizante de Desaparición Forzada, de los cuales por lo menos uno tendrá que ser mujer.



5. Dos (2) cupos por el hecho victimizante de Minas Antipersonas (MAP), Municiones sin Explotar (MUSE) y Artefactos Explosivos Improvisados (AEI), de los cuales por lo menos uno tendrá que ser mujer.
6. Ocho (8) cupos para representantes de OV de desplazamiento forzado, de los cuales por lo menos 4 tendrán que ser mujeres.
7. Un (1) cupo para un representante de las víctimas LGBTI.
8. Un (1) cupo para representante mujer por el enfoque diferencial de mujer.
9. Un (1) cupo para un representante de víctimas jóvenes (entre 18 y 28 años).
10. Un (1) cupo para representantes de víctimas por el enfoque diferencial de personas mayores (más de 60 años).
11. Un (1) cupo para un representante de víctimas con discapacidad.
12. Un (1) cupo para un representante de comunidades indígenas, designado por la Mesa de Participación Efectiva de Víctimas pertenecientes a Pueblos y Comunidades Indígenas, de acuerdo con su organización interna y en coordinación con sus autoridades tradicionales.
13. Un (1) cupo para un representante de comunidades tradicionales afrocolombianas.
14. Un (1) cupo para un representante de comunidades Rrom.
15. Dos (2) cupos para dos miembros de las ODV elegidas por parte las OV inscritas en el respectivo ámbito local.

El Decreto 512 de 2019, establece que la elección de los miembros de la Mesa Distrital de Participación Efectiva de las Víctimas se realiza por votación de los delegados y delegadas por hecho victimizante y enfoque diferencial, elegidos y elegidas en las MLPEV, quienes votan por el cupo a proveer por hecho victimizante y enfoque diferencial respectivo.

Las secretarías técnicas de las mesas de participación efectiva de víctimas son ejercidas por la Personería de Bogotá, entidad que en virtud de dicho rol se encarga de convocar y dirigir el proceso de elección de los miembros de los espacios, e instalar mediante acta las mesas. Por lo anterior, la Personería de Bogotá cuenta con información detallada sobre los integrantes de cada espacio. Sin embargo, a continuación, se presenta el número de delegados que fueron elegidos para el periodo (2019- 2021), de acuerdo a la información que fue siniestrada por la ST una vez instaladas la mesas en el año 2019, para efectos del acompañamiento técnico y el otorgamiento de garantías e incentivos:

MESA	CANTIDAD DELEGADOS
USAQUÉN	12
CHAPINERO	4
SANTAFE	15
SAN CRISTOBAL	20



USME	20
TUNJUELITO	8
BOSA	14
KENNEDY	23
FONTIBÓN	18
ENGATIVA	10
SUBA	20
BARRIOS UNIDOS	13
TEUSAQUILLO	13
MARTIRES	10
ANTONIO NARIÑO	16
PUENTE ARANDA	16
LA CANDELARIA	15
RAFAEL URIBE	20
CIUDAD BOLIVAR	23
SUMAPAZ	13
MUJERES	25
AFRO	11
INDÍGENA	15

Respuesta pregunta 8:

en el marco de los **Acuerdos de Paz suscrito por las FARC-EP**, las personas en tránsito a la legalidad y en proceso de reintegración, deberán estar acreditados por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, en el cual la **Agencia para la Reincorporación y la Normalización –ARN–**, plantea como límite de acceso, integrantes de Grupos Armados Organizados al Margen de la Ley -GAOML previamente certificados o acreditados por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz o el CODA que hayan recibido beneficios en el marco de los procesos de reintegración anteriores. Los beneficios en esta ruta son:

GENERACIÓN DE INGRESOS

a. Asignación Única de Normalización:

- Valor: dos millones de pesos (\$2'000.000).



- Cuando: una vez finalizadas las Zonas Veredales Transitorias de Normalización - ZVTN.
- Objetivo: la estabilización para la satisfacción de las necesidades básicas de la persona en proceso de reincorporación.
- Casos privados de la libertad beneficiados con indulto o amnistía: reciben la asignación 30 días siguientes a la fecha que recobren la libertad.
- Casos indultados que recibieron beneficios por proceso de reincorporación transitoria (Resolución 0075 de 2016): se le reconocerá la diferencia frente al valor establecido para la asignación única de normalización prevista en el Acuerdo Final.

b. Renta Básica:

- Valor: 90% del Salario Mínimo Mensual Legal Vigente -SMLMV en el momento de su reconocimiento.
- Cuando: surtido el proceso de acreditación y tránsito a la legalidad y a partir de la terminación de las ZVTN.
- Término: 24 meses. Siempre que no tengan un vínculo contractual, laboral, legal y reglamentario o un contrato de cualquier naturaleza que les genere ingresos.
- Posterior a los 24 meses: puede recibir el 90% del SMLMV, si acredita que ha continuado su ruta educativa en función de los propósitos de reincorporación y que no obtiene recursos por otro medio.
- Casos privados de la libertad beneficiados con indulto o amnistía: reciben la renta básica 1 mes posterior a la fecha que recobren la libertad.

c. Proyectos Productivos:

- Valor: Ocho millones de pesos (\$8.000.000,00) M.L. por una vez.
- Destino: proyecto productivo colectivo / proyecto productivo individual /proyecto de vivienda de carácter individual.
- Viabilidad de los proyectos: Consejo Nacional de la Reincorporación (CNR).

BENEFICIOS SOCIALES

- **Sistema de Seguridad Social en Salud y al Sistema de Protección a la Vejez:**
- Requisito: que no se encuentren vinculados a actividades generadoras de ingresos de cualquier naturaleza.
- Por cuanto tiempo: 24 meses.
- Base para cotización en pensiones: 1 SMLMV.

d. Seguro de Vida:

- El CNR establecerá los términos y condiciones para el otorgamiento de un seguro de vida para los beneficiarios acreditados.

e. Formación básica y superior:

- El Ministerio de Educación Nacional formuló e implementó el modelo piloto “Arando la Educación” que desarrolla una oferta de educación para adultos exintegrantes de



las Farc-Ep y personas de las comunidades aledañas a los ETCR (Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación)

f. Formación en desminado humanitario y cultivos ilícitos:

- Fundamentalmente se desarrollará en concertación con los pueblos étnicos y sus organizaciones representativas.¹

Por otro lado, el programa que pretende garantizar la incorporación integral de los menores de edad y su acompañamiento psicosocial, con la veeduría de las organizaciones sociales o especializadas, el cual fue construido desde el CNR y se le denomina **CAMINO DIFERENCIAL DE VIDA**: Programa Integral para la Atención y Consolidación de los Proyectos de Vida de los Menores de Edad que salen de las FARC EP, en el cual se contempla las siguientes fases: a. Restablecimiento de derechos; b. Reparación y c. Reincorporación e inclusión social. Este programa está a cargo de la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos.²

Este programa se basa en el interés superior del niño y sus derechos prevalentes, garantizando el restablecimiento de sus derechos, su reparación integral y su incorporación, sin perder de vista que todo ello ocurre como resultado como un acuerdo de paz y en el marco de tránsito a la legalidad de las FARC EP.³

Es importante indicar, que la información más detallada sobre este aspecto, puede ser suministrada directamente por la ARN.

Respuesta pregunta 9:

Según el artículo 49 de la Ley 1448 de 2011, se entiende por asistencia a las víctimas "*el conjunto integrado de medidas, programas y recursos de orden político, económico, social, fiscal, entre otros, a cargo del Estado, orientado a restablecer la vigencia efectiva de los derechos de las víctimas, brindarles condiciones para llevar una vida digna y garantizar su incorporación a la vida social, económica y política*". Dentro de este componente, encontramos medidas orientadas, por un lado, a la garantía del derecho a la subsistencia mínima, y otras orientadas a la estabilización socioeconómica.

Por lo anterior, y complementado lo informado en la respuesta al punto 1 del cuestionario, es competencia exclusiva del Distrito lo correspondiente a garantizar la subsistencia mínima a través de la ayuda humanitaria inmediata, desde la cual se busca que quienes

¹ ARN Agencia para la Reincorporación y la Normalización

² ARN Agencia para la Reincorporación y la Normalización

³ Lineamientos del Consejo Nacional de Reincorporación (CNR) para el Programa Integral Especial de Restitución de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes que salgan de las FARC EP.



lleguen a la ciudad por razón de algún hecho victimizante sucedido en el marco del conflicto armado, tengan alojamiento, alimentación y atención en salud desde que hacen su declaración hasta que son incluidos por la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas –UARIV – en el Registro Único de Víctimas. Vale la pena aclarar que los componentes básicos de AHL están determinados por la Ley 1448 de 2011 y sus decretos reglamentarios.

De la misma forma, el Distrito para el otorgamiento de atención humanitaria a personas que manifiestan ser víctimas de desplazamiento forzado se ha acogido a lo indicado por la norma y en el marco de sus competencias, entrega los componentes indicados en la Ley y verifica en cada caso la existencia de los presupuestos contenidos en el artículo 63 de la Ley 1448 de 2011 y artículo 2.2.6.5.2.1 del Decreto 1084 de 2015, a saber:

1. Manifestación de haber sido víctima de desplazamiento forzado, la cual se materializa con la declaración juramentada rendida ante Ministerio Público de la que trata el artículo 61 de la Ley 1448 de 2011 y el respectivo diligenciamiento del Formato Único de Declaración -FUD-.
2. La solicitud de otorgamiento de atención humanitaria inmediata debe ser presentada dentro de los tres (3) meses siguientes a la ocurrencia del hecho victimizante, a menos que se allegue certificado de fuerza mayor, emitido por el Ministerio Público, en cuyo caso los tres (3) meses contarán a partir de la fecha en que cesen las condiciones de fuerza mayor, de conformidad con lo establecido en el parágrafo 1 del artículo 63 de la Ley 1448 de 2011.
3. Podrán ser beneficiarios de atención humanitaria inmediata las personas y unidades familiares quienes una vez surtido el proceso de evaluación, evidencian la existencia de un estado de vulnerabilidad acentuada producto del desplazamiento forzado declarado.
4. Se reconocerá la atención humanitaria inmediata a las personas que manifiesten que Bogotá es su municipio receptor.

Ahora bien, la atención humanitaria inmediata se entrega de acuerdo a lo estipulado en el artículo 2.2.6.5.2.1 del Decreto 1084 de 2015 reglamentario de la Ley 1448 de 2011, que establece que *“la entidad territorial receptora de la población víctima de desplazamiento, debe garantizar los componentes de alimentación, manejo de abastecimientos, utensilios de cocina y alojamiento transitorio, mientras se tramite la inscripción en el Registro Único de Víctimas”*. *Negrita fuera del texto original.*

De otra parte, la ayuda humanitaria inmediata que corresponde al auxilio que se entrega por otros hechos victimizantes distintos a desplazamiento forzado, se otorga igualmente



acogiendo los parámetros indicados en el artículo 47 de la Ley 1448 de 2011, y artículo 2.2.6.4.1 del Decreto 1084 de 2015 así:

1. Manifestación de haber sido víctima de un hecho distinto a desplazamiento forzado, la cual se materializa con la declaración juramentada rendida ante Ministerio Público de la que trata el artículo 155 de la Ley 1448 de 2011 y el respectivo diligenciamiento del Formato Único de Declaración -FUD-.
2. El hecho victimizante debe haber ocurrido dentro de los últimos tres meses.
3. Encontrarse en situación de vulnerabilidad acentuada a partir de las afectaciones derivadas del hecho victimizante declarado.
4. Se reconocerá la ayuda humanitaria Inmediata a las personas que manifiesten que Bogotá es su municipio receptor.

Asimismo, el mismo Decreto en su artículo 2.2.6.4.1 define que "(...) *Esta ayuda debe cubrir los componentes de alimentación, aseo personal, manejo de abastecimientos, utensilios de cocina, atención médica y psicológica de emergencia, transporte de emergencia y alojamiento transitorio; por un (1) mes prorrogado hasta por un mes adicional*". Negrita fuera del texto original.

En atención al marco normativo expuesto, la entidad territorial de nivel municipal receptora de la población víctima es responsable de la etapa de inmediatez que va desde *"el momento en que se presenta la declaración, hasta el momento en el cual se realiza la inscripción en el Registro Único de Víctimas."*¹

De igual forma, como se informó en la respuesta al punto 1, de la mano con de la entrega de los componentes relacionados con la subsistencia mínima, la ACDVPR lleva a cabo un proceso de acompañamiento psicosocial en el marco de la atención o ayuda humanitaria inmediata, que desde el inicio de la ruta busca coadyuvar a mitigar el impacto de la afectación producto del hecho victimizante, contribuyendo a la asimilación de las dinámicas de la ciudad le permita superar su estado de vulnerabilidad acentuada.

Ahora, bien, respecto de la atención a excombatientes se aplica la ruta de asistencia a la que se hace referencia en el punto 4.

Ahora bien, con relación a la pregunta planteada en el punto 9.1, según la explicación precedente, existen beneficios diferenciales entre víctimas y ex combatientes, pues los programas y beneficios de los primeros encuentran fundamento en la Ley 1448 de 2011 *"Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno"* y respecto a los segundos, los planes, programas y proyectos descritos como respuesta a los puntos 8 y 9 del presente, están basados en el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y



Duradera. No obstante, ambos se encuentran y se articulan dentro de una ruta integral y complementaria.

Esperamos de esta forma haber atendido íntegramente su solicitud. La ACDVPR queda atenta a cualquier inquietud.

Atentamente,

CARLOS VLADIMIR RODRÍGUEZ VALENCIA

Alto Consejero para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación

Anexo: 0

Proyectó: Paul Solarte, Juan Manuel Patiño, Jennyfert Martínez
Revisó: Xiomara Amezquita, Jennyfert Martínez

14.